

LEGADOS DE UN PASADO IRRESUELTO

El *Informe Final* de la CVR y la crisis
de la democracia veinte años después

Coordinadores

Salomón Lerner Febres

Elizabeth Salmón

Capítulo 8



IDEHPUCP

Legados de un pasado irresuelto
El Informe Final de la CVR y la crisis de la democracia veinte años después

Salomón Lerner Febres y Elizabeth Salmón (coordinadores)

Equipo de producción editorial: Félix Reátegui, Alexander Benites, Paola Velarde,
Geraldine Chávez y Luis Valverde

Primera edición digital: noviembre de 2023

© Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (IDEHPUCP)
Tomás Ramsey 925, Lima 17 - Perú
Teléfono: (51 1) 626-2000, anexos: 7500 / 7501
ideh@pucp.edu.pe
www.idehpucp.pucp.edu.pe

Corrección de estilo: Rocío Reátegui

Diseño y diagramación: Ximena Barreto

Fotografía de cubierta: *El reencuentro de Geraldine y Daniel en Oronccoy* de Max
Cabello Orcasitas

*Los capítulos presentados en este libro fueron sometidos a un exhaustivo proceso de revisión
por parte de evaluadores externos.*

*Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin
permiso expreso de los editores.*

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 202311027
DOI: <https://doi.org/10.18800/9786124474477>

ISBN: 978-612-4474-47-7

DIVISIONES SIN SENDERO: IDENTIDADES RADICALES Y DEGRADACIÓN INSTITUCIONAL EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO

<https://doi.org/10.18800/9786124474477.008>

Daniel Encinas

<https://orcid.org/0000-0003-3078-5235>

Northwestern University

Antonio Zúñiga

<https://orcid.org/0000-0002-0206-3107>

Pontificia Universidad Católica del Perú

Resumen

El presente capítulo se enfoca en los efectos contemporáneos de dos identidades radicales de largo aliento: la identidad «tutelar-elitista», que refuerza las jerarquías tradicionales bajo la idea de «progreso», y la identidad «refundadora-popular» orientada a romper con la «dominación» reivindicando a los de «abajo». Ambas identidades no solo preceden y trascienden el conflicto armado, sino que fueron intensificadas por este a pesar de la derrota de Sendero Luminoso. El capítulo argumenta que estas identidades estructuran posiciones encontradas alrededor de tres patrones institucionales: a) el modelo económico, b) la geografía electoral y c) la conflictividad social. Asimismo, llama la atención sobre las tendencias desestructurantes de estas identidades y, en particular, su rol en generar enfrentamientos irreconciliables que contribuyen a una constante degradación institucional y al actual colapso social. El trabajo concluye que la supervivencia de estas identidades contradice las recomendaciones de la CVR referidas a construir un nuevo pacto social.

Palabras clave: crisis política, instituciones, identidades, nación, nacionalismo

Introducción

Perú vive desde hace algunos años en una crisis perpetua. En un inicio, esta crisis se restringía al enfrentamiento entre dos poderes del Estado (Gobierno y Congreso) controlados por dos tipos de derecha (Peruanos por el Kambio y el fujimorismo), pero paulatinamente se complejizó y empezó a echar raíces en la sociedad. La crisis política se transformó, en palabras de José Carlos Agüero, en un colapso social.¹ Evidencia de ello son los estallidos sociales de gran envergadura, la represión de las fuerzas del orden y los discursos que apelan a antagonismos étnicos, culturales, territoriales y socioeconómicos.

El presente capítulo llama la atención sobre estos discursos antagónicos y su conexión con el conflicto armado interno (CAI). Argumentamos que el actual colapso social responde al enfrentamiento entre identidades nacionales de corte radical y de largo aliento en el Perú: lo que llamamos la identidad «tutelar-elitista», proclive a una posición desde las jerarquías tradicionales, y lo que podría denominarse la identidad «refundadora-popular», orientada a una visión de «los de abajo». Estas identidades —reconocidas, no sin matices, por diversos estudios en las ciencias sociales y humanidades— preceden al CAI. No obstante, este periodo de violencia parece haberse asentado en ellas y contribuido a reproducirlas, reforzarlas y complejizarlas. Asimismo, el posconflicto coincidió con el fin de varios otros procesos: hiperinflación, sistema de partidos y la democracia. Planteamos, siguiendo a Soifer y Vergara (2019), que el posconflicto inició hacia mediados de la década de 1990.

Estas identidades no son las únicas que pueden encontrarse (o construirse) en el Perú. Ciertamente, tampoco son masivas ni parecen seducir de forma mayoritaria a una población más fragmentada que unificada alrededor de discursos limpios y claros. Sin embargo, ambas tienen un peso sobredimensionado en el debate público con consecuencias devastadoras en la actualidad. Los efectos contemporáneos de estas identidades se pueden rastrear en los discursos y comportamientos contrapuestos en torno a la continuidad de tres patrones institucionales durante el posconflicto: a) el modelo económico, b) la geografía electoral y c) la conflictividad social. Estos discursos estructuran la competencia y disputa por el poder, establecen los «amigos y enemigos» en la política peruana. Pero otros de sus efectos son, más bien, desestructurantes. Al generar campos antagónicos y difícilmente reconciliables, estas identidades también contribuyen a la constante degradación de la institucionalidad democrática del país. El actual estallido social y la respuesta represiva desde el Estado son una manifestación contemporánea de estos efectos.

¹ Esta división entre lo político y social es discutible. Acaso una mejor caracterización sería referirnos al ámbito político en sentido restringido (lo institucional-formal) y al ámbito político en sentido amplio (incluyendo la política movimentista y contenciosa). Véase la entrevista realizada por Enrique Patriau (2022) a José Carlos Agüero.

Como consecuencia, planteamos que una manera de entender el colapso social contemporáneo es la desatención a las conclusiones y recomendaciones del *Informe Final* de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003) y, en particular, su llamado a construir un nuevo pacto social donde la violencia no sea vista como un mecanismo válido para generar cambios y disminuya la discriminación y el desprecio contra la población históricamente marginalizada. Eliminar, esto es, las identidades nacionales radicales que nos predisponen al conflicto violento y el autoritarismo. Se trata de divisiones profundas que —como indicamos en el título— no requieren de la persistencia de Sendero Luminoso como una amenaza objetiva y que subsisten obstinadamente pese a su derrota.

1. Identidades nacionales y violencia política

De acuerdo con la famosa definición de Benedict Anderson (1993), una nación es una comunidad imaginada. Se compone de personas que no se conocen, pero que se imaginan como parte de un colectivo con «un compañerismo profundo» y lleno de «fraternidad». En Perú, en cambio, nos hemos tenido que conformar con imaginar la futura creación de la nación desde el inicio de nuestra vida independiente; es decir, enfrentarnos a la llamada «cuestión nacional» (Vergara, 2022). Esta última consiste en una interpelación por el lugar que deben ocupar los sectores históricamente marginalizados: el contraste entre la promesa peruana de una «vida próspera, sana, fuerte y feliz» (Basadre, 2005) y la cruda realidad de una distribución de poder desigual basada en diferencias étnico-raciales, culturales, socioeconómicas y territoriales.

Tomando como punto de partida esta definición, presentamos a continuación dos ficciones, discursos, narrativas, imaginarios o — como preferimos llamarlas — identidades que responden a la cuestión nacional de forma radical. Asimismo, desarrollamos algunas ideas que permiten entender su relación con el CAI.

1.1. ¿Qué son las identidades nacionales?

Definimos una identidad nacional como un tipo de identidad social que se basa en un conjunto de ideas sobre quién es el sujeto nacional y cómo debe reorganizarse el país para lidiar con la cuestión nacional. [RR4] Por identidad social no hacemos referencia a características esenciales, supuestamente fijas, inmutables o innatas. Entendemos que son artefactos socialmente construidos que definen roles, relaciones interpersonales y significados compartidos (Mahoney, 2021). La pertenencia a estas identidades sociales se manifiesta —de forma más o menos explícita— a partir de los discursos y comportamientos de las personas. Además, no se limitan a criterios

de clase o socioeconómicos. Incluyen categorías sociales con elementos culturales, étnicos-raciales y territoriales de gran relevancia para entender el Perú.

La definición también hace referencia a un *conjunto de ideas*. Este concepto, ciertamente amplio, incluye a las ideologías, entendidas como un cuerpo normativo que «describe la naturaleza de los seres humanos y la sociedad, así como la organización y propósitos de la sociedad» (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017, p. 6). Las ideologías «gruesas» (como el fascismo, liberalismo y marxismo) cuentan con un alto nivel de desarrollo teórico y ofrecen «respuestas complejas» y «comprehensivas a las preguntas» (2017, p. 6). En cambio, las ideologías «delgadas» carecen de estas respuestas y se asemejan más a mapas mentales que suelen tomar distintas formas de acuerdo a cómo se combinan con otras ideas. En ambos casos, sin embargo, estamos frente a descripciones y prescripciones.

Las identidades nacionales en las que nos enfocamos son radicales en el sentido de que tienen una proclividad al conflicto violento y el autoritarismo. Asimismo, se basan en ideologías delgadas.² Cargan, en consecuencia, con sobresimplificaciones acerca de la realidad porque trazan una línea maniquea entre lo que llamamos el *sujeto nacional* (el «verdadero» o «buen» peruano) y el *enemigo interno* (el «falso» o «mal» peruano). De esta manera, hacen un diagnóstico que culpa de los males del país al enemigo interno que supuestamente estanca o retrasa el potencial (histórico o futuro) del sujeto nacional. A la par, prescriben un país ideal dirigido por el sujeto nacional y donde el enemigo interno ha sido neutralizado o erradicado. En este sentido, responden a la cuestión nacional con una suerte de «altruismo parroquial» que es benevolente con los pares, pero que tiende al conflicto con aquellos que no son miembros del grupo (sobre el término, véase Bowles, 2008).

Si bien no negamos la existencia ni posibilidad de construir otras identidades nacionales, nos limitamos a analizar los efectos de dos de ellas que son de particular importancia en la actualidad: la identidad refundadora-popular y la identidad tutelar-elitista.

1.2. ¿Cuáles son las identidades nacionales radicales?

Los dos tipos de identidades en los que nos enfocamos son de largo aliento y cargan con respuestas radicales a la cuestión nacional. A partir de la revisión y síntesis de estudios previos, la Tabla 1 plantea una propuesta para describir los tres elementos constitutivos de cada una de las identidades: a) el sujeto nacional, b) el enemigo interno y c) los mecanismos y fines de la reorganización nacional.³

² De esta manera, no negamos la posibilidad de identidades nacionales que (a) se basen en ideologías gruesas; b) reconocen un enemigo externo antes que interno; y/o c) no se señalan principalmente en un enemigo, sino en alguna otra construcción social del sentido de pertenencia («nosotros» versus «los otros»).

³ Esta síntesis está particularmente inspirada en los planteamientos teóricos de Drinot (2011 y 2014) y

Tabla 1
Identidades nacionales radicales

	Identidad refundadora-popular	Identidad tutelar-elitista
Sujeto nacional	El «verdadero Perú» o el pueblo principalmente de base indígena, andina y territorialmente periférica	El «buen peruano» o una élite predominantemente de base blanca/mestiza, costeña y capitalina
Enemigo interno	La élite representante del «legado colonial» y/o los abusos contra el sujeto nacional	La población que representa el «atraso» y/o los problemas que estancan al Perú.
Reorganización nacional	Revolución «desde abajo» que neutralice a la élite y reivindique un glorioso pasado precolonial y/o un futuro promisorio usualmente más igualitario	Disciplina «desde arriba» que recorte libertades para impulsar alguna noción de progreso, «modernización» y/o ruta «civilizatoria»

Elaboración propia sobre la base de estudios citados en el cuerpo del texto.

Para empezar, la identidad refundadora-popular puede remontarse al inicio de la «tradición radical» estudiada por el historiador José Luis Rénique (2018 y 2022). En concordancia con nuestros planteamientos sobre ideologías delgadas, el autor describe esta tradición como una instancia de aquello que Shumway (2002) llama «ficciones orientadoras» y que estaría presente en distintos proyectos políticos y corrientes de pensamiento intelectual (por ejemplo, el indigenismo, el aprismo, el socialismo, el populismo y el maoísmo de Sendero Luminoso).

Siguiendo a Rénique, planteamos que el sujeto nacional de esta identidad es el «verdadero Perú» descrito originalmente por González Prada (1987). Como otros autores también sugieren, se trata de una población caracterizada en términos étnico-raciales («indios») y territoriales («banda oriental de la cordillera») —pero también culturales— que ha persistido en los imaginarios colectivos hasta la actualidad. En su estudio sobre las escuelas peruanas de hace más de treinta años, por ejemplo, Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart encontraron que profesores y estudiantes compartían una «idea crítica del Perú» en la que el Imperio incaico era entendido

Rénique (2018 y 2022)

como «el logro más apreciable del país» (2021, p. 83). Para los autores, se trataba de un «tradicionalismo romántico de desconfianza hacia lo nuevo» (2021, p. 90). Esta misma visión centrada en un «Perú autóctono» (Mariátegui, 1924) de «serranos y campesinos» o «indios infelices» (Bustamante, 1959) también ha estado presente en discursos recientes.

Este sujeto nacional, entonces, contrasta claramente con un enemigo interno: la «sociedad enferma» de «criollos y extranjeros» (González Prada, 1987), los jefes «mistis» que hablan otras lenguas y abusan de su poder (Bustamante, 1959), los representantes de la «civilización occidental» impuesta (Mariátegui, 1924), el «depredador blanco» y los técnicos de cultura mestiza (Díaz Martínez, 1969), aquellos que velan por intereses extranjeros e imperialistas (Portocarrero y Oliart, 2021), las élites capitalinas egoístas y codiciosas (Asensio, 2021) y/o corruptas y abusivas (Barrenechea y Encinas, 2022), entre otras caracterizaciones que destacan el legado colonial y la dependencia en el sistema internacional.

De estos arquetipos de sujeto nacional y enemigo interno se desprenden los mecanismos y fines de la reorganización nacional que prescribe la identidad refundadora-popular. La definición que Rénique plantea de la tradición radical resulta reveladora en este sentido. Esta tradición indica que «para ser una nación moderna e integrada el Perú requeriría de una revolución [...] de base indígena que [...] significara recobrar los fundamentos de un pasado glorioso [y] la cancelación del legado colonial representado por Lima» (Rénique, 2022, p. 17). Los matices, sin embargo, no son ajenos. Como plantea Rénique, hay «corrientes y persuasiones» que generan «un efecto a veces moderador o el exactamente opuesto (2022, p. 17).

La segunda identidad que presenta la Tabla 1 es aquella que denominamos «tutelar-elitista». El sujeto nacional es una élite modernizante o civilizatoria que es blanca o mestiza en términos raciales, culturalmente criolla y se ubica predominantemente en la costa y, sobre todo, en la capital limeña. Los imaginarios colectivos en torno a este sujeto nacional se remontan a la época colonial y la temprana república peruana (Zapata y Rojas, 2013, p. 19).

Sin embargo, ha asumido diferentes formas y matices. Por ejemplo, Felipe Pardo y Aliaga aparece en el análisis de la historiadora Cecilia Méndez (1993) como la representación de una élite criolla, blanca, superior y civilizada en contra de Santa Cruz y el proyecto de la Confederación Perú-Bolivia (2000) expresada en poemas tan satíricos como racistas. Bartolomé Herrera (1929) hace referencia a una «soberanía de la inteligencia» donde aquellos que cultivan el conocimiento deben mandar y la plebe (urbana o rural) debe obedecer. Durante el Oncenio de Leguía y el posterior Gobierno de Benavides, el sujeto nacional es una población blanca y mestiza —no indígena— compuesta por una élite «modernizante» y trabajadores industriales «des-indianizados» (Drinot, 2011, p. 2). En años más recientes, la identidad tutelar-elitista se ha articulado alrededor de un «archipiélago conservador» compuesto por diversos tipos de élites que se agrupan en la defensa de la continuidad del modelo

económico y un país libre del terrorismo (Vergara y Encinas, 2016). En su discurso suele salir a flote su contraste con un enemigo interno racializado (Drinot, 2014).

Precisamente, la idea del «enemigo interno» que reconocemos en esta identidad —y hemos extrapolado a la anterior— proviene originalmente del trabajo de Paulo Drinot (2014). El historiador presenta una lectura del discurso del «perro del hortelano» durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2010) a partir de Foucault. Su argumento es que en este proyecto neoliberal primó la soberanía sobre la gubernamentalidad; en otras palabras, expresaba un «miedo primitivo» y, en consecuencia, el uso de la «disciplina» hacia un otro recalcitrantemente anticapitalista («comunistas», «proteccionistas» y «medioambientalista») que no sería sino la población indígena del Perú que representa el supuesto «atraso» (2014, p. 172).

Más allá de este Gobierno en específico, uno puede encontrar diversos discursos ligados a la identidad tutelar-elitista donde el enemigo interno son los sectores históricamente excluidos del país en términos étnico-raciales, territoriales, culturales y socioeconómicos. De esta manera, los medios y fines de la reorganización que prescribe tienen que ver con las ideas de Felipe Pardo y Aliaga referidas a recortar «el exceso de libertad» contra el «caos» y el «caudillismo» propio de estos grupos poblacionales (véase Zapata y Rojas, 2013, p. 51), usar la educación occidental para homogeneizar culturalmente y borrar las diferencias (Zapata y Rojas, 2013, p. 44), «desindianizar» a partir de una incorporación industrial que transforma a los indígenas en trabajadores (Drinot, 2011), continuar con el ímpetu de la «revolución capitalista» (De Althaus, 2007) y, en sus versiones más represivas y violentas, disciplinar a la población (Drinot, 2014).

Como veremos, ambos tipos de identidades nacionales jugaron un papel durante el CAI y se complejizaron a partir de los legados discursivos de este periodo de violencia. De esta manera, la etapa posconflicto en el Perú ha estado marcada por una continuidad actualizada de las narrativas de refundación y tutelaje que hemos descrito.

1.3. ¿Cómo contribuyó la violencia a su continuidad?

La preexistencia de ambas identidades en el país sirvió como un terreno fértil para el despliegue de discursos y acciones de distintos actores durante el CAI. La tragedia nacional de las más de 69 000 muertes no puede entenderse en ausencia de estas narrativas y la manera en que la violencia política se sobrepuso sobre ellas, añadiéndoles capas de complejidad y permitiendo que tengan continuidad hasta la actualidad.

Por un lado, el discurso Sendero Luminoso se asentó sobre la identidad refundadora-popular y la llevó a un extremo (Rénique, 2022). Para esta organización terrorista, el enemigo interno es el «viejo Estado», los ricos, los gamonales y terratenientes que supuestamente combatía a partir de acciones sanguinarias (Degregori, 1999). Además, a diferencia de otros grupos de izquierda que también resaltaban el uso de

la violencia para generar cambios políticos, puso en práctica su «guerra popular» con acciones para «batir el campo» y dejar «un río de sangre» (Degregori, 1999, p. 142). Este grupo subversivo, en consecuencia, resultó ser el responsable del 54 % de las víctimas fatales durante el CAI (CVR, 2003).

De estas afirmaciones se desprende que la tradición radical de la identidad refundadora-popular incluye a Sendero Luminoso, pero no puede subsumirse a ella. No son uno y lo mismo, como se suele sugerir en varias oportunidades en el debate público. Aunque hay continuidades con otros discursos radicales anteriores y posteriores al CAI, la organización liderada por Abimael Guzmán es una visión extrema y particularmente cruenta de esta identidad nacional.

Por otro lado, la reacción desde el Estado tomó elementos de la identidad tutelar-elitista. Inicialmente, «el Perú moderno, urbano y limeño, trató con indiferencia a las regiones más afectadas por la violencia, las más alejadas y pobres» (Comisión de Entrega de la CVR, 2008, p. 19). Es decir, primó aquello que Patricia Heilman (2010) llama la «política del abandono» en la actuación del Estado. Pero los agentes del Estado también incurrieron en violaciones de derechos humanos, especialmente contra la población pobre, rural e indígena que era asemejada con las organizaciones terroristas de forma muchas veces indiscriminada e injustificada (CVR, 2003).

El llamado «terruqueo» o la práctica de identificar erróneamente a una persona o a un grupo con organizaciones terroristas sirvió desde los años ochenta para justificar crímenes contra la población civil (Aguirre, 2011). En concordancia con la identidad tutelar-elitista, el enemigo interno no era únicamente el terrorismo, sino los sectores de la ciudadanía históricamente excluidos. En los noventa, el «terruqueo» como versión de la identidad tutelar-elitista pasó a convertirse en un discurso que justifica la persecución contra los opositores al régimen autoritario liderado por Alberto Fujimori (Burt, 2011). Eran años en los que, como señaló el testimonio que da título al trabajo de Burt (2011), se consideraba que «quien habla es terrorista». Luego del CAI y la transición a la democracia, el «terruqueo» persistió ya no necesariamente para justificar las violaciones de derechos humanos —aunque su potencial para aquello, como se ha comprobado recientemente, sigue intacto—, sino para negar la diversidad de ideas en el país. En particular, como veremos, se empezó a asociar con terrorismo a grupos de izquierda y/o centro que no defendían la continuidad del modelo económico (Vergara y Encinas, 2019).

Es posible argumentar que la CVR (2003) llamó la atención sobre ambas identidades nacionales y su rol en el CAI. Para evitar que se repita un periodo de violencia como el vivido, la CVR indicó la necesidad de, por un lado, concretar medidas para reducir el espacio a la discriminación y el desprecio hacia sectores históricamente excluidos de la población. Es decir, algo que podría interpretarse como superar la identidad tutelar-elitista. Como indican sus conclusiones (numeral 9), la violencia hacia ellos «no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata [...] el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana

a casi dos siglos de nacida la República». La CVR también destaca, por otro lado, que inicialmente el PCP-Sendero Luminoso «fue uno de los muchos pequeños partidos de izquierda radical, que pugnaban por: a) la reconstrucción (o reconstitución) del Partido Comunista y/o b) el (re)inicio de la lucha armada» (2003, t. II, p. 17). En el posconflicto resultaba necesario, entonces, superar la noción —más asociada con la identidad refundadora-popular— de que la violencia desde abajo es una forma válida de llevar a cabo transformaciones.

Pese a estas recomendaciones, ambas identidades se han mantenido y complejizado. No es este el espacio para desarrollar un modelo teórico elaborado sobre cómo el conflicto violento ha contribuido a su reproducción. En la literatura especializada hay autores que destacan cómo la violencia puede generar grupos más cohesionados y antagonismos que dan paso a instituciones fuertes.⁴ No es el caso peruano, donde las instituciones son generalmente reconocidas como débiles. Pero sí destacan, al menos, dos mecanismos que conectan el CAI con la reproducción de las identidades. Primero, una parte de la desinstitucionalización del país (particularmente la debilidad de los partidos políticos) y la afectación del tejido social son consecuencia del periodo de violencia. La deficiente representación democrática y el proceso continuo de degradación de la política o «vaciamiento democrático» (Barrenechea y Vergara, 2023) puede atribuirse parcialmente al CAI. Por otra parte, destaca la continuidad de las batallas discursivas alrededor de los legados del conflicto.⁵ Estas batallas discursivas han servido para agregar complejidad a las identidades radicales. El mencionado «terruqueo», como claro ejemplo, no solo se asienta en las identidades radicales. También añade una capa de complejidad para señalar al «enemigo interno» de la identidad tutelar-elitista («terruco») o denunciar al «enemigo interno» de la identidad refundadora-tutelar («terruqueador»).

A continuación, mostramos cómo estas identidades radicales estructuran desde hace varios años las posiciones contrastantes en torno a tres patrones institucionales.

2. Los efectos estructurantes durante el posconflicto

2.1. El modelo económico

La década de 1990 significó la instauración del neoliberalismo en el país. La propuesta del Estado neoliberal consistía en que su tamaño sea mínimo y que vele por el cumplimiento del Estado de derecho, el libre mercado y la propiedad privada (Harvey, 2013). Uno de los principales cambios del aparato estatal en aquel periodo fue que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incorporó un gran número de

⁴ Por ejemplo, revisar Huntington (1968) y Levitsky y Way (2013).

⁵ Por ejemplo, revisar Soifer y Vergara (2019).

expertos y se manejó bajo una lógica más técnica que política. Como señala Dargent (2008, p. 71), esa autonomía responde a tres orígenes: 1) los altos costos que implicaba si el sector no era dirigido de manera técnica; 2) el consenso sobre lo que significa una política económica prudente; y 3) la independencia de los expertos en economía.

Durante esos años se desarrollaron las llamadas «islas de eficiencia», que eran agencias estatales como la SUNAT, INDECOPI, etc. Probablemente, el caso paradigmático de este tipo de instituciones es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Hasta el 2001, el presidente del BCRP que más años había durado en el cargo fue Germán Suárez, entre 1992 y el 2001, precisamente durante el periodo autoritario del Gobierno de Fujimori. Tras la recuperación de la democracia, en el Gobierno de Alejandro Toledo hubo tres presidentes del BCRP. Pero, desde el 2006, bajo el Gobierno de García, Julio Velarde sigue ininterrumpidamente al mando de dicha institución. Esta estabilidad de diecisiete años en el manejo de la macroeconomía contrasta con la inestabilidad política de los últimos años (seis presidentes en siete años). Además, que ha resultado en récords históricos de crecimiento económico y reducción de la pobreza bajo una sana política fiscal.

Según la Constitución de 1993, el Perú cuenta con una economía social de mercado; sin embargo, si bien hay una apertura económica y un marco regulatorio que la fomenta, el Estado no ha cumplido su rol de distribuidor. El «modelo» económico peruano termina siendo más cercano al mercantilismo que al libre mercado (Parodi, 2022). Y dado que la hiperinflación y el periodo definitorio del conflicto armado vinieron juntos (fines de la década de 1980 y principios de la de 1990), en el Perú cada vez que alguien propone cambiar el «modelo» hay una asociación con lo antisistema y, por tanto, con el terrorismo. Cambiar el modelo supone el «retraso», volver a la década de 1980. Por el contrario, continuar con el «modelo» sería lo moderno, lo propio de nuestros tiempos.

A los defensores del modelo los podemos ubicar en la identidad tutelar-elitista, y allí se encuentran los representantes de gremios empresariales, líderes de opinión y la mayoría de políticos que se ubican hacia la derecha del espectro político. Por su parte, los que se oponen al modelo suelen montarse en identidad refundadora-popular: representantes de la izquierda política y algunos sectores de la ciudadanía organizada. No se trata de ubicar a todos los que creen en la continuidad y el cambio en las identidades tutelar-elitista y refundadora-popular, respectivamente, sino de llamar la atención de que la defensa del cambio o la continuidad tiene la tendencia a tomar como recursos estas narrativas antagónicas de largo aliento. Los de la identidad refundadora-popular ven al modelo económico como problema y, más importante aún, su cambio como una solución prácticamente mágica a una serie de problemáticas que el crecimiento económico no ha logrado resolver. Por el contrario, aquellos adscritos a la identidad tutelar-elitista afirman que precisamente el sostenimiento del modelo ha impedido que el Perú caiga al peor de los mundos y que, a pesar de la

crisis política, haya esperanza de mejorar. Los problemas vendrían con el cambio, no con la continuidad.

En la sociedad, este punto no es particularmente polarizante. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 2021), el 58 % considera que debe mantenerse el modelo, pero con algunos cambios; mientras que el 33 % señala que debe cambiarse totalmente y 5 % indica que debe continuar igual. Es decir, casi el 90 % considera que se deben hacer cambios; la cuestión es de grado. Sobre ese punto, la mayoría no está en la línea de un gran cambio, se trataría de ajustes. La mayor parte de la población escapa a esta dicotomía entre refundación y tutelaje, apuestan por una vía reformista o moderada. No obstante, el debate público puede llegar a estar predominantemente enfocado en la defensa de la continuidad o del cambio desde las identidades radicales.

2.2. Los patrones geográficos del voto

En la primera parte de la década de 1990, el sistema de partidos en el Perú colapsó (Mahoney, 1998). Desde entonces no tenemos un sistema de partidos, sino un sistema de competencia, donde participan «coaliciones de independientes» (Zavaleta, 2014)⁶, que se organizan para el periodo electoral sin mayor perspectiva de vida partidaria. En ese contexto, las elecciones se tornan bastante imprevisibles, y, ante la ausencia de partidos, como señala Muñoz (2010), la explicación al voto se encuentra más relacionada con el personalismo del candidato que con los factores ideológicos, programáticos o con dinámicas de clientelismo.

Es decir, la imagen y las cualidades personales del candidato serían más importantes que sus propuestas. Aunque, según Sulmont (2018), los vínculos personalistas podrían ayudar a construir conexiones programáticas. En ese escenario, la fragmentación del voto ha sido una de las características de los resultados electorales en las primeras vueltas. Sin embargo, esta fragmentación se ha desplomado en las últimas elecciones. Desde el 2001, en todas las elecciones nacionales en primera vuelta, la suma de los dos candidatos más votados supera el 50 % (el 2016 sumaban 60,8 %), pero, el 2021, Keiko Fujimori y Pedro Castillo juntos representaron el 32,3 %. No ha sido un declive progresivo en la agregación del voto, sino una caída acelerada.

Dado que nuestro sistema electoral exige tener más de la mitad de los votos para ser elegido presidente en primera vuelta, las segundas vueltas nos han llevado a polarizarnos. Por lo general, en las segundas vueltas hay una división territorial del voto: el centro y sur del país prefieren a un candidato; mientras que Lima y el norte eligen a otro. Si se hace el contraste del voto en la segunda vuelta entre Lima metropolitana y Puno desde el 2001, se observa que en Puno ganó Toledo (2001), Humala (2006), Humala (2011), PPK (2016) y Castillo (2021); mientras que en Lima ganaba el can-

⁶ Sobre algunas críticas al estudio de Zavaleta, revélese Grompone (2016, p. 126).

didato contrario, salvo en el 2001 (Toledo). Solo en las elecciones inmediatamente posteriores al Fujimorismo Lima y Puno coincidieron.

Cabe precisar que estas categorías territoriales no son totalmente coherentes ni internamente homogéneas (Encinas y Fuentes, 2021), pero sí es posible encontrar esa tendencia. Esta división territorial en dos bloques también ha sido categorizada como preferencias «pro *stablishment*» frente a las «anti *stablishment*». El primer grupo podría estar más en la línea de lo que Vergara (2007) denomina «librecambismo»; mientras que el sur del país estaría en la línea de la intervención estatal.

Como se mencionó en párrafos anteriores, las segundas vueltas llevan a cierto clima de polarización; por ejemplo, a candidatos de izquierda como Verónica Mendoza (2016) y Pedro Castillo (2021) se los ha acusado de tener cercanías con Sendero Luminoso. No obstante, en el voto tampoco se observa que la sociedad peruana se encuentre dividida en dos bandos; la fragmentación es la constante, y en estas últimas elecciones ese proceso se ha agudizado más. Pero las segundas vueltas nos ofrecen un momento polarizante que recrea esa ficción en la que se inserta la tradición tutelar-elitista y la refundadora-popular. En la que algunos actores se atribuyen la defensa del *statu quo*; mientras que otros proponen cambiarlo todo.

2.3. La conflictividad social

Al mismo tiempo que teníamos una democracia (precaria), se reducía la pobreza y aumentaba el crecimiento económico; la conflictividad social era una constante en el país. Ante la ausencia o extrema debilidad de los partidos políticos como organizaciones canalizadoras de las demandas de la sociedad, los ciudadanos optaron por un mecanismo informal directo: la protesta social. En América latina, el Perú es uno de los países con los niveles más altos de participación ciudadana en protestas sociales; y esta dinámica se mantuvo desde hace varios años (Latinobarómetro, 2019).

Siguiendo ese vínculo entre conflictividad social y representación, Panfichi (2011) desarrolla el concepto de «representación contenciosa». Es decir, a diferencia de la representación política que surge de las elecciones, la representación contenciosa se basa en la identificación sociológica, en compartir una misma matriz sociocultural. Esta representación haría uso de los conflictos sociales para expresar y negociar sus demandas. A pesar de que las protestas sociales han sido parte del juego político desde fines de la década de 1990, estas en su mayoría han sido principalmente fragmentadas, y no se han llegado a conformar movimientos sociales propiamente.

Pero las protestas sociales han ejercido un poder de veto frente a las acciones gubernamentales, y, en muchas ocasiones, esto ha permitido que sobreviva la frágil democracia (Ilizarbe, 2022). El tipo de conflictividad más recurrente ha sido la denominada (por la Defensoría del Pueblo) «socioambiental», que se encuentra ligada a las industrias extractivas, las cuales se ubican principalmente en los departamentos de la sierra del país. El modelo económico peruano se sostiene en parte por el dinero

recibido de estas empresas mediante concesiones e impuestos; de ahí el incentivo por parte del Estado para que aumenten este tipo de proyectos.

La respuesta del Estado frente a la conflictividad social ha sido contradictoria, dado que, por un lado, ha desarrollado varias agencias y mecanismos de diálogo y, por otro, hubo muchos episodios de fuerte represión de las fuerzas armadas y policiales. Y, desde las élites políticas y empresariales, se produjo el denominado «terruqueo», que se ha convertido en una práctica común para referirse a los que protestan. Llamar «terroristas» a los ciudadanos les posibilita justificar la represión.⁷ En determinadas coyunturas, se activan los discursos vinculados a las identidades tutelar-elitista y refundadora-popular; los usan determinados grupos que posibilitan el escalamiento del conflicto y la posterior violencia.

Sin embargo, en los últimos años, todos los ciudadanos que utilizan el recurso de la protesta social no necesariamente se ubican en la categoría de la identidad refundadora-popular, ya que grupos conservadores también han usado este recurso. Como en las marchas de «Con mis hijos no te metas», en contra de la incorporación del enfoque de género en los colegios, o «Por la paz», que estaban a favor de la continuidad de Boluarte en el ejecutivo y en contra de las protestas que pedían nuevas elecciones.

3. Los efectos desestructurantes

Las identidades nacionales que hemos descrito generan campos antagónicos alrededor del modelo económico, la geografía electoral y la conflictividad social en el Perú contemporáneo. Dan, en este sentido, estructura a la política peruana. No obstante, también se trata de discursos políticos radicales que tienen una tendencia al enfrentamiento violento. En ellos no predominan valores democráticos ni una tendencia a la moderación que permita la convivencia armónica en la ciudadanía (Mainwaring y Pérez-Liñan, 2013; Levitsky y Ziblatt, 2018). Más bien, son narrativas que plantean un juego de suma cero donde prima la intransigencia, el cortoplacismo y los sesgos cognitivos (Weyland, 2021).

La importancia de estas narrativas ha aumentado a medida que el proceso de «vaciamiento democrático» se ha agudizado en el Perú y ha dado paso al predominio de actores cada vez más novatos en el país que circulan de forma acelerada en el poder y no tienen vínculos con la sociedad (Barrenechea y Vergara, 2023). Esta degradación institucional ha resultado recientemente en un momento pre-hobessiano de pura confrontación (Tanaka, 2022) en el que la «democracia por defecto» (Barrenechea y Encinas, 2022) que persistía en el Perú se ha desmoronado y ha dado inicio a un rumbo autoritario (Encinas, 2023).

⁷ Zúñiga (2021) encuentra que hay miembros de Sendero Luminoso que participan en las protestas sociales, pero no son los líderes y constituyen una pequeña minoría en la movilización.

3.1. De la crisis política a las identidades nacionales

Desde 2016, el Perú enfrenta una crisis política marcada por el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que no estaba relacionada con las identidades descritas. Inicialmente era un conflicto institucional entre dos poderes del Estado controlados por distintos tipos de fuerzas políticas de derecha: Peruanos por el Cambio (PPK) y Fuerza Popular (el fujimorismo). El conflicto institucional empezó porque el fujimorismo se negó a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales, en las que perdieron por escaso margen, y por su decisión de usar su abrumadora mayoría congresal para desestabilizar el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El uso cotidiano de mecanismos extremos de control dispuestos en la Constitución, propio de aquello que en inglés se denomina *constitutional hardball* (Paredes y Encinas, 2020), llegó a cambiar el sistema político peruano en la práctica al «parlamentarizarlo» (Dargent y Rousseau, 2020).

El resultado no solo fue la constante interpelación y censura de ministros, sino también la imposibilidad de que prácticamente cualquier presidente se sostuviera en el poder. En noviembre de 2020, la crisis política dio paso a un estallido social de gran envergadura que rechazó la vacancia del presidente Martín Vizcarra y el Gobierno sucesor de Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso. La respuesta desde el Estado fue bastante represiva y ocasionó muertes. La crisis, sin embargo, continuó siendo predominantemente política a pesar de que ya involucraba a la calle como un componente central.

Las elecciones presidenciales de 2021 aumentaron la complejidad de la crisis y, eventualmente, resultaron en el colapso social contemporáneo. Luego de una primera vuelta marcada por una fuerte apatía y fragmentación, la presidencia se terminó de definir entre dos líderes de tendencias ideológicas opuestas, pero similarmente radicales y autoritarios (Barrenechea y Encinas, 2022). Ambos protagonizaron la segunda vuelta electoral más polarizante desde el regreso a la democracia. En nuestros términos, sus campañas reprodujeron las identidades nacionales que hemos descrito previamente.

Pedro Castillo, candidato del partido político Perú Libre de tendencia marxista-leninista, reivindicó exitosamente la identidad refundadora-popular. Aunque sus detractores insistieron en calificarlo de comunista, su principal característica política fue un discurso populista que exaltó el «mito del provincial redentor» (Asensio, 2021). Aparentemente inspirado en la idea crítica del Perú que le brinda su condición de maestro rural, Castillo se posicionó exitosamente como representante del «Perú profundo» y del pueblo históricamente victimado por las élites (Barrenechea y Encinas, 2022). Sus promesas electorales, aunque inconsistentes y poco desarrolladas en términos técnicos, incluían la transformación radical del Perú a partir de un cambio de la correlación de fuerzas a favor de «los nadies», destruir instituciones de control político y entes reguladores del Estado y una asamblea constituyente que permitiera un nuevo modelo económico.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, montó su campaña de segunda vuelta sobre la identidad tutelar-elitista. Fujimori se centró principalmente en brindar un discurso que se oponía al supuesto comunismo de Castillo, pero también prometió «mano dura de madre» y «demodura». Es decir, ella y sus aliados parecían ofrecer un Leviatán anticomunista y antiterrorista que era —en el fondo— una plataforma de campaña racista y clasista que exaltaba un histórico «miedo blanco hacia la población que Castillo representaba (Encinas, 2021). El rival de Fujimori fue tildado de salvaje por un líder de la extrema derecha peruana. Asimismo, el premio nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, lo caracterizó como un «pobre señor», «un idiota» y «un analfabeto». Cuando el fujimorismo finalmente perdió la elección, se inventó un fraude electoral e intentó que prestigiosos estudios de abogados capitalinos ayudaran a eliminar 200 000 votos provenientes principalmente de las zonas rurales donde ganó Castillo.

3.2. De la campaña electoral al colapso social

Una vez en el poder, como señaló elocuentemente el politólogo Alberto Vergara, Castillo no impulsó un giro izquierdista sino carterista (Encinas, 2023). Es decir, no hubo esfuerzos sustanciales para avanzar el cambio de gran envergadura que había prometido y, más bien, incurrió en una lógica patrimonialista de acercamiento al Estado. El presidente incluso fue irregular en su nivel de radicalismo, pues optó por presidentes del Consejo de Ministros por momentos más moderados (Mirtha Vásquez) o alejados de una orientación ideológica de izquierda (Héctor Valer), y parecía haber dejado de lado las pretensiones de cambiar la Constitución. Una ruta más pragmática de su gobierno pareció iniciar, simbólicamente, con un abandono del característico sombrero que usó durante la campaña electoral. En palabras del escritor e historiador José Carlos Agüero (2022): «se alejó de todo programa, de toda idea, de toda aspiración de mediano o largo plazo que hiciera posible una reforma social y política».

No obstante, Castillo logró recuperar niveles de aprobación popular y apelar a su base electoral primigenia al confrontar nuevamente a las élites. En el debate público, la pregunta dejó de ser en qué momento cae el presidente; más bien, surgió la extrañeza de por qué duraba a pesar de sus múltiples debilidades y las denuncias en su contra. De acuerdo con el Ministerio Público, Castillo podría ser:

cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima. (Infobae, 2022)

Parte de la respuesta radica en la manipulación de la cuestión nacional. En una oportunidad, Castillo preguntó a una multitud de simpatizantes: «¿Ustedes creen que un maestro rural le va a robar al país? ¿Ustedes creen que un campesino le va a robar al propio campesino?». Meses después quedó claro que era una pregunta retórica: «¡Un campesino no le puede robar a un campesino! ¡Un maestro no le puede robar a un maestro!», exclamó. Este razonamiento se basa, como puede notarse, en exaltar al sujeto nacional e insinuar el enemigo interno de la identidad refundadora-popular.

El presidente, sin embargo, logró apelar con mayor éxito a esta identidad en el acto que dio fin a su gobierno. El 7 de diciembre de 2022 se presentó en televisión nacional y anunció un golpe de Estado en el que se proclamaba dictador. Su retórica en ese anuncio regresaba a promesas de campaña como la Asamblea Constituyente. La medida fracasó por falta de apoyo popular, congresal y de las fuerzas del orden. La incierta votación por la vacancia presidencial programada para el día siguiente fue desplazada por la urgente decisión del Congreso de sacar del cargo a Castillo y permitir que fuera encarcelado antes de que se exiliara en una embajada.

Pese al fracaso del golpe de Estado, la identidad refundadora-popular persistió. Castillo logró, para decirlo con el título de una de las obras de Rénique (2018), incendiar la pradera. Su caída movilizó inicialmente solo a organizaciones cercanas al presidente, pero las encuestas de opinión mostraban la inclinación de la población a convocar a elecciones generales. La vicepresidenta y exministra de Castillo, Dina Boluarte, anunció en su primer mensaje a la nación que se quedaría hasta el 2026. Como se comprobó posteriormente, Boluarte y el Congreso se atrincheraron en el poder. Las protestas crecieron a partir de la movilización de la identidad refundadora-popular: «un profundo resentimiento, de la falta de reconocimiento de la república, llevando las relaciones entre región y Estado central a un punto extremo» (Rénique, 2022). La política de las calles se engrosó, pero también mostró mayores niveles de violencia.

En gran medida, la radicalidad de las protestas y la violencia que mostraron responden a las medidas represivas adoptadas por las fuerzas del orden. Estas medidas han costado la vida de docenas de personas, incluyendo menores de edad, y miles de heridos en un nivel que supera lo visto en Gobiernos peruanos previos y otros estallidos sociales en América Latina (Encinas, 2023). La justificación en la que se sustenta la cruenta represión no es otra que la identidad tutelar-elitista. Junto con discursos conspiranoicos que destacan la manipulación de agentes nacionales y extranjeros, la población movilizada ha sido señalada como un Otro peligroso que necesita disciplina debido a su composición predominantemente sureña, andina, indígena y popular. La retórica oficialista es anticomunista y antiterrorista, lo que destaca la superposición entre los legados del CAI y la identidad tutelar-elitista que le precede.

3.3. La coalición tutelar-elitista y su rumbo autoritario

La pretensión de permanecer en el poder (pese al rechazo generalizado de la población en las encuestas y las protestas en las calles) y el uso de la represión como principal mecanismo para conseguirlo ha agrupado en una coalición de gobierno a Dina Boluarte y Alberto Otárola, supuestamente ubicados de la izquierda al centro, con las fuerzas de derecha más recalcitrantes del Congreso. Pese a la ausencia de vínculos institucionales, los une la identidad tutelar-elitista como pegamento que justifica la represión desplegada y el apoyo de las fuerzas del orden, algunos grandes medios de comunicación y sectores empresariales. Esta continuidad en el poder permite las ventajas que la perforación del Estado de derecho admite (Barrenechea y Encinas, manuscrito inédito), pero también evitar sanciones por los abusos cometidos en los últimos meses.

La justicia está en deuda. Las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la última ola de protestas no han sido sancionadas. Esto tiene algún correlato con el estancamiento en los últimos años de los procesos judiciales frente a los crímenes de lesa humanidad asociados al periodo del conflicto armado (Burt y Rodríguez, 2015, p. 136). También nos remite a las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado que se produjeron de manera sistemática en algunos momentos y lugares durante ese periodo de violencia (CVR, 2003). En efecto, uno de los defectos del accionar represivo del Estado durante el CAI fue que no supo distinguir a los subversivos de la población civil. Algo similar se produjo en la respuesta estatal frente a las manifestaciones, pero al no diferenciar entre la violencia organizada y población movilizada. Asimismo, las protestas se concentraron en el sur del país, un espacio en el que la violencia del conflicto armado se había manifestado con mucha intensidad. Además de la masacre en Ayacucho, vale destacar que Puno ha sido el principal escenario de conflictividad social en estos últimos meses. En este último departamento es donde encontramos más muertos (33), heridos (246), movilizaciones, hechos de violencia, días de inmovilización social y bloqueos de vías terrestres (Observatorio de la democracia y gobernabilidad en el Perú, 2023).

Una señal de que este Gobierno se sostiene en una coalición tutelar-elitista es la persistencia de discursos y comportamientos que no calan en la mayoría de la población. En la encuesta del mes de julio de 2023 del IEP, el 70 % está de acuerdo con una Asamblea Constituyente, y un porcentaje aún mayor se unifica alrededor de la demanda de elecciones generales. También se destaca que cerca de 8 de cada 10 peruanos desaprueba a la presidenta; mientras que 9 de cada 10 lo hace con el Congreso.

Precisamente por esta impopularidad, la coalición tutelar-elitista está impulsando un acelerado rumbo autoritario. La represión ha mellado fuertemente el derecho a la protesta y hemos visto arbitrariedades como la intervención de universidades y detenciones injustificadas. No se trata de hechos aislados, sino de acciones sistemáticas que dan continuidad a los actores en el poder. El balance de poder entre el Gobierno

y el Congreso prácticamente se ha diluido por la alianza mencionada. También se ha neutralizado la actuación de instituciones estatales clave de control contra los abusos de poder como el Tribunal Constitucional, el canal del Estado y la Defensoría del Pueblo. Actualmente, el objetivo de la coalición de gobierno parece ser sancionar a la Junta Nacional de Justicia y, de este modo, atacar a los jefes de los organismos electorales. El riesgo es que la única arena de contestación que queda intacta —las elecciones democráticas— sea afectada con la intención de manipular los resultados. Como dice la canción, esta democracia ya no es democracia. Hasta dónde llegará la autocratización que vivimos es todavía materia incierta.

4. Conclusiones

Si bien no hay una sola memoria sobre el CAI, durante el Fujimorismo se instauró una memoria hegemónica, bastante en la línea de la tutelar-elitista, donde los «héroes» de la pacificación serían Fujimori y las Fuerzas Armadas. Concordamos con aquellos que plantean que una memoria alternativa anclada en la democracia y los derechos humanos contribuiría a evitar caer nuevamente en ciclos de violencia. Pero también reconocemos que no basta simplemente con «recordar» y «saber», también se necesita poner en acción cambios sociopolíticos que remuevan los factores que posibilitaron la violencia en primer lugar (Uffe y Málaga, 2015, p. 173). Aunque estos cambios suelen entenderse en términos materiales y objetivos, nuestro trabajo llama la atención sobre los imaginarios colectivos y las narrativas que preceden y sobreviven al CAI: la identidad tutelar-elitista y la identidad refundadora-popular.

La supervivencia de estas identidades radicales se puede entender como un fracaso en la atención de las conclusiones y recomendaciones de la CVR (2003). En su vigésimo aniversario, debe destacarse que el *Informe Final* invitó a concretar medidas para reducir el espacio de la discriminación y el desprecio hacia los sectores de la población históricamente marginalizados,⁸ taras históricas de las que se alimenta la identidad tutelar-elitista. También rechazó la idea fuertemente arraigada en algunos discursos políticos de que la violencia es un mecanismo válido para generar cambios, una de las fuentes que da sustento a la también peligrosa identidad refundadora-popular.

El país no ha transitado en esta dirección en los últimos veinte años. Con el fin (o el declive) del conflicto armado⁹ se instauró una determinada lógica del sistema político, con un modelo neoliberal y técnico en el aspecto económico, momentos

⁸ En las comisiones de la verdad de Perú y Guatemala, a diferencia de las de Chile y Argentina, para calcular el número de víctimas se decidió hacer estimaciones, debido a que las estructuras coloniales opacaban aún más a las víctimas, que fueron en su mayoría indígenas (Stern, 2015, pp. 117-118).

⁹ Aquí tomamos la periodicidad planteada por Soifer y Vergara (2019), el conflicto armado habría terminado a mediados de la década de 1990.

polarizantes —o, cuando menos, de antagonismos geográficos y los correlatos socio-culturales con los que cargan— en las segundas vueltas electorales y una alta conflictividad social durante los periodos de gobierno. En estas tres arenas se ha usado el lenguaje de la guerra, la manifestación de los legados discursivos del conflicto y las identidades discursivas más antiguas en las que se asentó el periodo de violencia y que hemos descrito.

La violencia del conflicto armado contribuyó a aumentar la fragmentación social y política (CVR 2003, p. 343). Como señalan varios trabajos recientes enfocados en Perú, el poder se encuentra diluido en nuestro país por este y otros motivos (Levitsky y Zavaleta, 2019; Barrenechea y Vergara, 2023; Barrenechea y Encinas, 2022). En este sentido, los persistentes discursos identitarios descritos previamente —tutelar-elitista y refundador-popular— no deben leerse necesariamente como aquello que hace particular al Perú. Lo que parece resaltar es la predominancia sobredimensionada de estos miedos primitivos, sesgos y odios —existentes también en otros países— a causa de la ausencia de instituciones que las envuelvan o moderen. Las identidades radicales, entonces, no son un fiel reflejo de las dinámicas sociales ni preferencias políticas mayoritarias, pero tampoco están desconectadas de la realidad. Son apropiados por pequeños grupos que los activan como una suerte de partitura que ya se encuentra escrita a lo largo de nuestra historia. Una que cambia de melodía y de ritmo, pero que sigue produciendo la misma canción de tendencia violenta y autoritario. Más que polarización, entonces, nuestro reconocimiento de la continuidad de identidades nacionales radicales es una manifestación de la degradación institucional del país y su reemplazo por posiciones extremas, no necesariamente masivas, pero sí suficientemente beligerantes para apropiarse de la imaginación política sin dar cabida a narrativas alternativas.

En la política peruana las reglas de juego son muy fluidas y los actores políticos — muchas veces novatos — son poco predecibles, pero lo que ha sido relativamente constante son los discursos basados en las identidades radicales descritas, sobre todo en escenarios y tiempos de crisis como el actual. Es imposible que en una sociedad no haya contraposiciones de intereses, visiones y proyectos políticos. No se trata de anular el antagonismo, sino de canalizarlo hacia una sociedad viable (Denegri y Hibbett, 2016, p. 35). El supuesto pragmatismo bajo el que se mueven los actores políticos en la actualidad —dispuestos al exaltar discursos radicales al par que avanzan intereses particulares— carece de sentido para avanzar en esa dirección. Están muy lejos de ser Maquiavelo, descrito acertadamente por Andrés Malamud como «un pragmático al servicio de un ideal».¹⁰ Reconciliar el pragmatismo con la idea de mejora o cambio en la sociedad es una tarea necesaria.

¹⁰ Véase Edwards (2021).

Referencias

- Aguirre, C. (2011). Terruco de m... Insulto y estigma en la guerra sucia peruana. *Histórica*, 35(1), 103-139.
- Agüero, J. C. (2017). *Persona*. Fondo de Cultura Económica.
- Agüero, J.C. (2022, 13 de diciembre). Desprecio. *Noticias Ser*. <https://www.noticias-ser.pe/desprecio>
- Alvarado, M. (2014). El etnocacerismo como populismo radical. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 1(1), 115-129.
- Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexión sobre el origen y difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica.
- Asensio, R. (2021, 17 de febrero). Presidente sin sombrero. *Instituto de Estudios Peruanos*. <https://iep.org.pe/noticias/columna-presidente-sin-sombrero-por-raul-asensio/>
- Barrenechea, R. y Encinas, D. (2022). Perú 2021: democracia por defecto. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 42(2): 407-438
- Barrenechea, R. y Encinas D. (manuscrito inédito). Dina y Castillo: lotería electoral, depredación estatal. En A. Vergara y R. Barrenechea (Eds.), *Vaciamiento Democrático*.
- Barrenechea, R. y Vergara, A. (2023). *El vaciamiento democrático en Perú... y más allá*. Nueva Sociedad. <https://nuso.org/articulo/Peru-democracia-vaciamiento/>
- Basadre, J. (2005). *La promesa de la vida peruana*. Constructores.
- Bowles, S. (2008). Being human: Conflict: Altruism's midwife. *Nature*, 456, 326–327. <https://doi.org/10.1038/456326a>
- Burt, J.M. (2011). “Quien Habla es Terrorista”: The Political Use of Fear in Fujimori's Peru. *Latin American Research Review*, 41 (3), 32-62
- Burt, J.M. y Rodríguez, M. (2015). Justicia, verdad y memoria: el proceso penal para el caso de la masacre de Accomarca. En L. Huber y P. Del Pino (Comps.), *Políticas en justicia transicional: miradas comparativas sobre el legado de la CVR* (pp. 135-168). Instituto de Estudios Peruanos.
- Bustamante, J. (1959). *Viaje al antiguo mundo*. Mercagraf.
- Comisión de Entrega de la CVR. (2008). *Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - Perú*. CVR.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2003). *Informe Final*. CVR. cverdad.org.pe.
- Dargent, E. (2008). *Islas de eficiencia y reforma del Estado: Ministerios de Economía y de Salud 1990-2008*. CIES. <https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2016/07/islas-de-eficiencia-y-reforma-del-estado.pdf>

- Dargent, E. y Rousseau, S. (2020). Choque de Poderes y Degradación Institucional: Cambio de Sistema sin Cambio de Reglas en el Perú (2016-2022). *Política y gobierno*, 29 (2).
- De Althaus, J. (2007). *La revolución capitalista en el Perú*. Fondo de Cultura Económica
- Denegri, F. y Hibbett, A. (2016). *Dando cuenta: estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú (1980-2000)*. PUCP.
- Degregori, C.I. (1999). Cosechando tempestades. En S.J. Stern (Ed.), *Los Senderos Insólitos del Perú* (pp.133- 159). Instituto de Estudios Peruanos - Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga.
- Díaz Martínez, A. (1969). *Ayacucho: hambre y esperanza*. Ediciones Waman
- Drinot, P. (2011). *The Allure of Labor*. Duke University Press.
- Drinot, P. (2014). Foucault in the Land of the Incas. En: P. Drinot (Ed.), *Peru in Theory* (pp.167-190). Palgrave Mcmillan.
- Edwards, G. (2021, 24 de abril). *ANDRÉS MALAMUD: "ARGENTINA no está condenada al ÉXITO, ni al FRACASO" - LA INQUIETUD* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=RnqOIZVdYwY>
- Encinas, D. (2021, 31 de agosto). El último juego sobre la mesa. *Letras Libres*. <https://letraslibres.com/politica/el-ultimo-juego-sobre-la-mesa/>
- Encinas, D. (2023, 01 de febrero). En Perú se ha impuesto el caos autoritario. *Letras Libres*. <https://letraslibres.com/politica/daniel-encinas-peru-caos-autoritario/>
- Encinas, D. y Fuentes, A. (2021). La geografía política de las elecciones presidenciales de 2021 en Perú. *Elecciones* (julio-diciembre), 20(22), 231-282.
- González Prada, M. (1987). *Páginas libres*. Librería Studium.
- Grompone, R. (2016). Lo que queda del día: sobre partidos y sombras. En J. Aragón (Ed.), *Participación, competencia y representación política: contribuciones para el debate* (pp. 113-130). Instituto de Estudios Peruanos - Jurado Nacional de Elecciones.
- Harvey, D. (2013). *Breve historia del neoliberalismo*. Akal.
- Heilman, P.J. (2010). *Before the Shining Path: Politics in Rural Ayacucho, 1895–1980*. Stanford University Press, 2010.
- Herrera, B. (1929). *Escritos y discursos* (Tomo 1). Librería Francesca Científica y Casa Editorial E. Rosay.
- Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Ilizarbe, C. (2015). Memoria, olvido y negacionismo en el proceso de recomposición política en el Perú de la posguerra del siglo XXI. En L. Huber y P. Del Pino (Comps.), *Políticas en justicia transicional: miradas comparativas sobre el legado de la CVR* (pp. 231-259). Instituto de Estudios Peruanos.

- Ilizarbe, C. (2022). *La democracia y la calle. Protestas y contrahegemonía en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Infobae (2022, 15 de agosto). Pedro Castillo: las seis investigaciones y acusaciones que la Fiscalía de la Nación ha iniciado en contra del presidente. <https://www.infobae.com/america/peru/2022/07/21/pedro-castillo-investigaciones-fiscalia-de-la-nacion-caso-tarata-ii-ascensos-ffaa-fuga-de-funcionarios/>
- Instituto de Estudios Peruanos. (2021). *Informe técnico. Encuesta de intención de voto. Elecciones Generales 2021. Segunda vuelta (abril II 2021)*. <https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Tecnico-IEP-OP-Abril-II-2021.pdf>
- Instituto de Estudios Peruanos. (2023). *Informe de Opinión-Julio 2023*. <https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/07/IEP-Informe-de-Opinion-Julio-2023-completoeste-si.pdf>
- Latinobarómetro. (2019). Cultura política de la democracia en Perú y en las Américas, 2018/19: tomándole el pulso a la democracia. Resumen ejecutivo. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/peru/AB2018-19-Peru-Resumen-Ejecutivo-Spa-Final-W-200811.pdf>
- Levitsky, S. y Way, L. (2013). The durability of revolutionary regimes. *Journal of Democracy*, 24(3), 5-17.
- Levitsky, S. y Zavaleta M. (2019). ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Planeta.
- Levitsky, S. y Zibblat, D. (2018). ¿Cómo mueren las democracias? Ariel.
- Mahoney, J. (2021). *The logics of the social sciences*. Princeton University Press.
- Mainwaring, S. y Pérez-Liñán, A. (2013). *Democracies and dictatorship in Latin America*. Cambridge University Press.
- Mariátegui, J.C. (1924). Lo nacional y lo exótico. *Mundial*.
- Méndez, C. (1993). *Incas sí, Indios no*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Muñoz, P. (2010). Análisis de resultados del perfil del elector peruano. En Jurado Nacional de Elecciones, *Perfil del elector peruano* (pp. 37-49). Jurado Nacional de Elecciones.
- Observatorio de Democracia y Gobernabilidad en el Perú de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. (2023). Estallido social en el Perú. <https://democracia-gobernabilidad.pucp.edu.pe/participaci%C3%B3n/estallido-social/tablero-de-datos>
- Panfichi, A. (2011). La representación contenciosa: la dimensión política de los conflictos sociales en el Perú. En Aula Magna, *Crecimiento y desigualdad: conflicto social y gobernabilidad* (pp. 125-148). <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/189012/8.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Paredes, M. y Encinas, D. (2020). Perú 2019: crisis política y salida institucional. *Revista de ciencia política*, 40(2), 483-510.
- Parodi, C. (2022, 7 de enero). ¿Tiene el Perú algún modelo económico? *Gestión*. <https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2022/01/tiene-el-peru-algun-modelo-economico.html?ref=gesr>
- Patriau, E. (2022, 18 de diciembre). José Carlos Agüero: «La gente suele decir que estamos en una crisis política, pero es otra cosa: es un colapso social» [Entrevista]. *La República*. <https://larepublica.pe/politica/actualidad/2022/12/18/jose-carlos-aguero-la-gente-suele-decir-que-estamos-en-una-crisis-politica-pero-es-otra-cosa-es-un-colapso-social-congreso-dina-boluarte>
- Portocarrero, G. y Oliart P. (2021). *El Perú desde la escuela* (2.ª ed.). Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.
- Rénique, J.L. (2018). *Incendiar la pradera. Un ensayo sobre la revolución en el Perú*. La Sinistra Ensayos.
- Rénique, J.L. (2022). *La nación radical*. Sinistra Ensayos.
- Shumway, N. (2002). *La invención de la Argentina*. Ediciones Emecé.
- Soifer, H. y Vergara, A. (2019). Introduction: Leaving the Path Behind. En H. Soifer y A. Vergara (Eds.), *Politics after Violence: Legacies of the Shining Path Conflict in Peru* (pp. 1-16). University of Texas Press.
- Stern, S. (2015). Las verdades peligrosas: comisiones de la verdad y transiciones políticas latinoamericanas en perspectiva comparada. En Huber, L. y Del Pino, P. (Comp.), *Políticas en justicia transicional: miradas comparativas sobre el legado de la CVR* (pp. 111-133). Instituto de Estudios Peruanos.
- Sulmont, D. (2018). ¿Existe el voto programático en elecciones con un sistema de partidos políticos débil? Un análisis de las elecciones presidenciales peruanas de 2016. *Revista de Ciencia Política*, 38(3), 429-457. <https://ojs.uc.cl/index.php/rcp/article/view/4582/4250>
- Tanaka, M. (1998). *Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Tanaka, M. (2022, 13 de diciembre). Semana de Vértigo. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/semana-de-vertigo-por-martin-tanaka-noticia/>
- Ulfe, M. E. y Málaga, X. (2015). Los nuevos suplicantes del Estado peruano: las víctimas y el Programa Integral de Reparaciones (PIR). En L. Huber y P. Del Pino (Comps.), *Políticas en justicia transicional* (pp.169-190). Instituto de Estudios Peruanos.
- Vergara, A. (2007). *Ni amnésicos ni irracionales. Las elecciones peruanas de 2006 en perspectiva histórica*. Solar.

- Vergara, A. (2022). An eruption of history in Peru's Bicentenary. *Current History*, 121 (832), 57–62.
- Vergara, A. y Encinas, D. (2016). Continuity by Surprise. *Latin American Research Review* 51 (1), pp.159-180.
- Vergara, A. y Encinas, D. (2019). From a partisan right to a conservative archipelago. En H. Soifer y A. Vergara (Eds.). *Politics after Violence: Legacies of the Shining Path Conflict in Peru* (pp. 226-249). University of Texas Press.
- Weyland, K. (2021). *Revolution and reactions*. Cambridge University Press.
- Zapata, A. (2016). *Pensando a la derecha*. Planeta.
- Zapata, A. y Rojas R. (2013). *¿Desiguales desde siempre?*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Zavaleta, M. (2014). *Coaliciones de independientes: las reglas no escritas de la política electoral*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Zúñiga, A. (2021). *Permanencia y abandono del PCP-SL: reintegración a la sociedad de los presos por terrorismo del PCP-SL en Lima*. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]